

El Salvador proceso

informativo semanal

año 11
número 454

noviembre 28
1990

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- El terrorismo del Estado
- Nueva ofensiva del FMLN
- El proceso de diálogo,
en medio de otro túnel
- La intensificación de la guerra
y los derechos humanos
- El caso jesuitas y las perspectivas
para la paz en El Salvador (I)

Biblioteca Florentino Idoate



166966

El terrorismo del Estado

Esta semana, ante la resolución del juez Zamora de acumular los delitos de terrorismo, conspiración y actos preparatorios de terrorismo contra los autores materiales del asesinato de los jesuitas, la parte defensora reaccionó rechazando los nuevos cargos. Aunque la argumentación de la defensa es a todas luces aberrante, presenta de modo transparente la inspiración institucional, legal e ideológica que fomenta el terror estatal y asegura su impunidad.

Según la defensa, "este tipo de delitos no se puede tipificar a miembros de la Fuerza Armada que lo que hacen es cumplir con su deber constitucional", añadiendo que "la ley establece que los actos preparatorios de terrorismo son los que ejecutan las organizaciones clandestinas y la Fuerza Armada no es una institución que ha estado operando en la clandestinidad". Justamente la no clandestinidad e institucionalidad a las que alude la defensa, así como la ley a que apela, no vuelven la masacre y sus agravantes un acto de terrorismo cualquiera, sino uno de terrorismo estatal.

Lejos de excusar o atenuar los delitos de los asesinos, la argumentación de la defensa ha puesto el caso en su correcta perspectiva, no como un hecho aislado e irracional de unos individuos sino como un problema de orden institucional. Porque no se trata únicamente de que la ley pueda establecer diferencias entre los delitos y violaciones cometidos por ciudadanos comunes y los perpetrados por la Fuerza Armada, cosa que, aunque de suyo absurda, podría superarse con modificaciones a la redacción de la ley. Se trata, en el fondo, de la práctica y de la ideología que refleja dicha ley. Porque si se establecen diferencias en la tipificación del delito, en razón de la pertenencia a una institución, es porque se presume que la intencionalidad es buena, con independencia de las violaciones y del terror que siembren los miembros de la Fuerza Armada. Algo que precisamente está a la raíz de todos los totalitarismos y es fomento y legitimación de las más atroces violaciones institucionales a los derechos humanos.

El problema va mucho más allá de la formación e indoctrinación deshumanizantes en que se educa a los miembros de la Fuerza Armada. Nada menos que en los medios de comunicación social, particularmente en los matutinos escritos, se promueve y difunde esta ideología totalitaria cuando han hecho regla el calificar como "terroristas" acciones o declaraciones por el solo hecho de provenir de rebeldes u opositores, y se disimula, y hasta se celebra como patriótico anticomunismo y "cumplimiento de deberes constitucionales", clarísimos actos de barbarie y terror de la Fuerza Armada.

Por ello, no basta con que el relator especial de las Naciones

Unidas, Dr. Pastor Ridruejo, se limite a señalar en sus informes que las torturas y las violaciones del ejército y cuerpos de seguridad no son dictadas por la política gubernamental. En un Estado como el salvadoreño, en donde la habitud de aterrorizar psicológica o físicamente está tan bien establecida, sobra una política específica de represión y terrorismo, aunque sea una perenne y real tentación de grupos poderosos dentro del gobierno y del ejército. De allí que lo verdaderamente grave sea que cualquier política estatal que no tenga como centro y eje configurador combatir eficazmente este habitual proceder violatorio y erradicar la práctica de deformar y desinformar la opinión pública y la conciencia de los militares, forma parte integral del mantenimiento del terrorismo estatal.

Atenerse a los hechos y a los datos comprobados constituye una forma mucho más honesta y eficaz de combatir el terrorismo y democratizar la sociedad, que el maniqueísmo beligerante que impera en el Estado y grupos de poder. Y los datos verificados para el último semestre comprendido entre mayo y octubre dan cuenta de 27 asesinatos perpetrados por los escuadrones de la muerte, 21 por la Fuerza Armada, y 7 por el FMLN. Cifras que en conjunto y por separado resultan intolerables, pero que indican claramente dónde continúa radiando la fuente principal del terror en el país.

Sin embargo, reducirse al simple análisis de las cifras y los contrastes estadísticos con períodos tenebrosos de terror, remotos o recientes, de poco sirve para esclarecer la real situación y precariedad de los derechos humanos en el país. Hace tres meses, el **New York Times** informaba de un plan preconcebido por la Fuerza Armada y los extremistas de ARENA para exterminar a todo civil de la oposición. Este mes ha vuelto a mencionarlo el **Washington Post** y, en la presente semana, lo ha denunciado también el FMLN.

El gobierno y el ejército han rechazado tajantemente la denuncia rebelde, aunque los mismos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano han advertido con insistencia que un recorte sustancial de la ayuda militar provocaría una reacción violenta en las estructuras del terror estatal. Si a ello se agrega que en la próxima ronda negociadora se prevé el logro de los primeros acuerdos en el tema de la desmilitarización y cese de la impunidad, tendríamos ya la conjugación de dos factores que podrían significar el fin de la impunidad, y quizá el castigo de los escuadroneros, pero que también, por lo mismo, podrían desencadenar el paroxismo de éstos. La tercera llave que detonaría sus furias sería la entrega de los autores intelectuales de la masacre de la UCA, pero ésta es una llave que los norteamericanos guardan tan celosamente como su propia seguridad nacional.

Ojalá que las fuentes de inteligencia norteamericana, que tuvieron conocimiento anticipado del plan de asesinar a los jesuitas, sepan ahora atajar a tiempo una nueva barbarie de sus aliados salvadoreños.

Nueva ofensiva del FMLN

La actividad militar insurgente ha experimentado en las últimas semanas un extraordinario incremento, que constituye la mayor escalada bélica registrada en el país durante el transcurso del presente año.

Ya en los primeros 17 días de noviembre, el FMLN aseguró que sus fuerzas habían ocasionado al ejército un total de 181 bajas, al tiempo que dañaron o destruyeron 68 estructuras del tendido eléctrico. Pese a las evidencias, sin embargo, el 19 de noviembre, el viceministro de Seguridad Pública, coronel Inocente Orlando Montano, manifestaba a la prensa que el accionar del FMLN mostraba un bajo perfil, al punto que sus anunciados planes de implementar una nueva ofensiva de gran envergadura estaban "desmontados". Según Montano, ello se debía a la conjunción de, por una parte, la presión internacional adversa a ese tipo de medidas violentas y, por otra, al despliegue de intensos operativos castrenses destinados a neutralizar la movilidad insurgente. Pocas horas después de formuladas estas declaraciones, el FMLN ponía en marcha su mayor maniobra nacional desde la ofensiva de noviembre del año pasado.

La nueva campaña rebelde, iniciada formalmente el día 20, constituye una respuesta a los continuos e intensos operativos contrainsurgentes puestos en marcha por el ejército en los últimos meses. El FMLN fue preparando el terreno para la nueva ofensiva con una progresiva escalada de su actividad bélica. En las dos semanas previas al inicio de su actual campaña militar, la prensa reportó 15 combates de encuentro en 7 departamentos, y 6 ataques guerrilleros a posiciones gubernamentales en 5 departamentos. En San Salvador, las acciones de asalto de los comandos urbanos se multi-

plicaron, adoptando diversas modalidades —sabotaje al tendido eléctrico, ataques a subestaciones de CAESS y CEL, emboscadas a patrullas militares y ataques a puestos de la defensa civil— y transformando a la capital en un gigantesco escenario de operaciones bélicas. Particular relevancia tuvo, en el marco de tal escalada bélica, el ataque rebelde, el 15 y 16 de noviembre, a efectivos del batallón Jucuarán estacionados en la población de San Agustín (Usulután). Según radio Farabundo Martí, en dicho ataque las unidades del FMLN ocasionaron 48 bajas —14 muertos y 34 heridos— a la tropa cercada en la localidad, a la cual le incautaron 15 fusiles M-16, dos ametralladoras pesadas M-60, equipos de comunicación y otros pertrechos de guerra.

Intensa campaña insurgente

En las primeras horas del 20 de noviembre, fuerzas insurgentes atacaron simultáneamente posiciones gubernamentales en 7 departamentos y 11 ciudades del centro, norte y oriente del país. La cantidad y calidad de las acciones arrojaron tan sólo en los dos primeros días de la campaña rebelde, según los reportes del COPREFA, 33 muertos y 160 heridos en la Fuerza Armada y 44 muertos y 39 heridos en las filas insurgentes.

En San Salvador, la principal acción rebelde consistió en un segundo ataque, en menos de seis semanas aunque de menor intensidad, a las instalaciones de la Fuerza Aérea (FAS), ubicadas en Ilopango. El FMLN emprendió el ataque desde el costado sur-oeste de la colonia Santa Lucía, mediante intenso fuego de morteros y fusilería. En los combates, que se prolongaron por dos horas, el FMLN hirió a 4 efectivos del

batallón aerotransportado y destruyó un avión del tipo 0-2 de reconocimiento. Por su parte, tropas de la FAS incautaron un cañón de 57 mm y recuperaron 21 granadas y bloques de TNT.

En Apopa, Nejapa y Quezaltepeque (La Libertad), las columnas insurgentes atacaron los puestos de la defensa civil y de la Policía y Guardia Nacional. En Quezaltepeque, además, el FMLN destruyó 2 agencias bancarias y 1 local comercial, mientras que en los alrededores de Nejapa atacó el puesto de seguridad del beneficio MECAFE. En Apopa, los rebeldes tomaron posiciones fijas en las populosas colonias Madre Tierra, Tikal, Chintuc, y Ciudad Obrera. Aquí, los combates resultaron particularmente cruentos y se prolongaron por más de 15 horas ininterrumpidas. En total, en estas 3 poblaciones, las acciones arrojaron un saldo de 8 muertos y 13 heridos en las filas del ejército, así como 15 heridos en la población civil.

En Chalatenango, el FMLN atacó la cabecera departamental y ocupó las poblaciones de La Laguna, Dulce Nombre y Comalapa. Según el COPREFA, en tales acciones murieron 14 efectivos del Destacamento Militar Nº 1 y otros 48 resultaron heridos, mientras en las filas rebeldes murieron 18 combatientes. La población civil sufrió, por su parte, 11 muertos y 62 heridos.

En la zona oriental, el FMLN hostigó la Sexta Brigada de Infantería, en Usulután, las posiciones militares de la periferia de San Miguel, y las instalaciones del Destacamento Militar Nº 4, en San Francisco Gotera (Morazán). Según el reporte oficial de bajas, en los combates en Morazán murieron 21 insurgentes y 5 soldados, y quedaron heridos 35 guerrilleros y 23 soldados. También murieron 2 civiles y otros 5 resultaron heridos. En La Paz, el FMLN atacó las instalaciones de la Cooperativa Algodonera "Entre Ríos", donde incendió 3 avionetas fumigadoras y causó pérdidas cercanas a los

3 millones de colones. Paralelamente, las fuerzas insurgentes incrementaron su actividad de sabotaje contra el tendido eléctrico, derribando 36 estructuras sostenedoras de líneas conductoras de hasta 115 mil voltios.

El FMLN denominó a su maniobra nacional "Castigo a la Fuerza Armada antidemocrática", justificándola como una medida necesaria para desentramar el proceso de diálogo-negociación. Según el FMLN, la continuidad de los operativos contrainsurgentes en las zonas de tradicional persistencia guerrillera, junto al escaso avance en el enjuiciamiento de los responsables de la masacre de la UCA, y a la intransigencia del gobierno para discutir en serio el tema de la desmilitarización de la sociedad, volvían necesario el recurso a la presión militar. Por la misma razón, el FMLN se reserva el derecho a lanzar a corto o mediano plazo una ofensiva de gran escala si la solución política al conflicto no prospera. A la vez, el FMLN ha anunciado que el despliegue de su actual campaña militar marca el inicio del proceso de conversión de sus fuerzas en un ejército nacional para la democracia, el cual contaría con un escalafón de mandos similar al del ejército gubernamental.

La campaña insurgente se prolonga

Luego de dos días de acoso a posiciones militares en la periferia norte de la capital, el accionar rebelde expandió su teatro de operaciones a la zona oriental del país, sin por ello disminuir el accionar de los comandos urbanos en San Salvador. Fuentes gubernamentales presentaron el repliegue rebelde de San Salvador como la finalización de la campaña militar, debido a la presión internacional que descalificaba el proceder insurgente. Voceros del FMLN negaron tal versión y anunciaron que sus fuerzas mantendrán su presión militar. Un comandante insurgente señaló que "lo que están haciendo estos señores del gobierno es

tratar de arreglar en un comunicadito lo que no ha hecho con más de 50 mil efectivos, como es ponerle paro y resistencia a un ejército guerrillero que en pocas horas de combate los ha puesto en una situación completamente difícil".

El 22 de noviembre, columnas rebeldes atacaron durante 45 minutos, con fuego de morteros y lanzacohetes RPG-7, la subestación de CEL en la colonia Miralvalle, aunque sin ocasionarle, a pesar de todo, daños de consideración. Efectivos combinados de la Primera Brigada de Infantería, del batallón Atlacatl y del Destacamento Militar N° 7 repelieron a los insurgentes. El comando conjunto del Frente Central "Modesto Ramírez" se atribuyó, a su vez, cuatro ataques sincronizados contra el sistema de seguridad del Estado Mayor, y aseguró haber ocasionado 8 bajas al ejército en la acción. Otro soldado resultó herido después de que comandos urbanos lanzaron una bomba contra un retén militar frente al portón poniente de la Universidad de El Salvador. Asimismo, los comandos urbanos dinamitaron 5 agencias bancarias en el marco de un nuevo plan de sabotaje justificado como protesta contra la decisión gubernamental de privatizar el sistema bancario. Entretanto, la continuación del sabotaje al tendido eléctrico nacional redundó en que el déficit de energía en San Salvador alcanzara el 70 por ciento en sus momentos más críticos.

En el interior, la prensa reportó 3 combates de encuentro y 4 ataques del FMLN a posiciones del ejército en 4 departamentos del centro y oriente del país. En La Libertad, columnas rebeldes atacaron el puesto de la defensa civil de Zaragoza, dando muerte a un paramilitar y lesionando a un sargento. En Cuscatlán, las fuerzas insurgentes lanzaron un fuerte ataque, utilizando fuego de fusilería, ametralladoras y lanzacohetes, contra las guarniciones de la Policía Nacional y de la defensa civil de Suchitoto. Mientras, en el cantón Milingo, de la misma

jurisdicción, el FMLN averió un helicóptero con fuego de fusilería. En San Vicente, 8 efectivos de la Quinta Brigada de Infantería murieron al ser emboscados cuando se conducían en una patrulla militar en la carretera que une a San Vicente con Tecoluca, entre los lugares conocidos como La Flecha y Puente Negro. También 2 civiles perecieron en dicha acción al quedar atrapados en fuego cruzado. Otros combates se registraron en los alrededores de Tecoluca, en el área de El Playón, dejando un saldo de 5 efectivos de la Quinta Brigada y 4 insurgentes muertos. La noche del 22 de noviembre, el FMLN atacó, con fuego de morteros 81 mm, las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería, en San Miguel, con saldo de 5 efectivos muertos y 4 heridos. Otros combates de encuentro se desarrollaron en el cantón Oromontique, de la jurisdicción de Chinameca, donde pereció un insurgente y 4 más quedaron heridos.

El accionar bélico en Usulután

En el marco de la presente campaña militar del FMLN, merecen especial atención la calidad y cantidad de las acciones bélicas en Usulután. Además de ser, hasta el momento, los más intensos, los combates librados en dicho departamento podrían imprimirle una nueva dinámica al desenvolvimiento de la guerra, si el FMLN se decide a institucionalizar el uso de misiles tierra-aire —como los que empleó el 23 de noviembre para derribar un cazabombardero A-37 "Dragonfly" de la FAS— los cuales podrían neutralizar significativamente la ventaja que para la Fuerza Armada han representado los medios aéreos en lo que va del conflicto. Hasta la fecha, el fuego aéreo ha resultado determinante para el ejército, al permitirle ablandar las posiciones rebeldes, movilizar con rapidez a sus tropas y garantizar su eficiente avituallamiento.

En la última semana, durante los combates desarrollados en el mencionado de-

partamento, además del A-37 —la tercer aeronave de este tipo derribada a lo largo del conflicto— el FMLN derribó una avioneta 0-2 de reconocimiento y un helicóptero. El A-37 fue derribado cuando apoyaba a unidades de infantería que sostenían intensos combates en las cercanías del cantón Las Marías, en los alrededores de Santa Elena. En la acción, el FMLN utilizó un misil tierra-aire SAM-7, de fabricación soviética. El helicóptero, en cambio, fue derribado mediante un disparo de lanzacohetes RPG-2, en las inmediaciones de Jiquilisco.

La prensa ha reportado, en relación a las acciones de Usulután, 4 combates de encuentro y 5 ataques del FMLN a posiciones fijas del ejército. En dicho marco, tropas del batallón Atonal han sostenido combates con columnas insurgentes en el transcurso de operaciones de rastreo y desalojo en las proximidades de la hacienda Santa Teresa, donde perecieron dos insurgentes. Otros dos murieron cerca de la quebrada Joya del Muerto, de la comprensión de Santa Elena. Más efectivos del Atonal combatieron en el cantón Los Amates, donde resultó herido uno de ellos; mientras que 5 soldados de la Sexta Brigada de Infantería perecieron durante combates con unidades rebeldes en la localidad de La Garita, en el área comprendida entre San Marcos Lempa y Jiquilisco.

Un reporte del COPREFA asegura, por su parte, que efectivos del Destacamento Militar N° 4 localizaron 12 cadáveres de insurgentes en áreas rurales de los poblados de Chilanga y Lolotique.

El FMLN hostigó también el puesto de la Guardia Nacional en Mercedes Umaña, así como las posiciones del batallón Atonal. En la acción, las unidades rebeldes utilizaron fuego de fusilería y morteros de 81 mm, hiriendo a 2 efectivos gubernamentales. Otros enfrentamientos se desarrollaron en el sector sur de la ciudad de Usulután, con saldo de 5 insurgentes y 1 efectivo muertos, y otros 5 soldados heridos. Además, el FMLN destruyó el beneficio de café San Ambrosio; mientras, en Ozatlán, resultó herido un soldado cuando el ejército intentó repeler otra acción ofensiva insurgente. En la periferia de Jucuarán, murieron 11 soldados y 13 más quedaron heridos. El COPREFA, por su lado, aseguró que también murieron 4 rebeldes en esos combates.

La implementación de la reciente campaña insurgente reafirma la urgencia de solucionar el conflicto a través de opciones políticas. Sólo cabe esperar que no sea necesario aumentar todavía más los niveles de confrontación y de destrucción bélica para que las fuerzas contendientes caigan en la cuenta de ello.

El proceso de diálogo, en medio de otro túnel

A un año de la ofensiva de noviembre, y tras ocho meses de haberse reiniciado, bajo los auspicios de la ONU, las negociaciones entre el gobierno y el FMLN, la situación del proceso es todavía incierta. El mediador de la ONU, Alvaro De Soto, declaró el 15 del presente mes, en Ginebra —donde participó, durante dos días, en una reunión de expertos para tratar cuestiones sobre el ordenamiento jurídico en El Salvador, relacionadas con el proceso de paz— que las negociaciones estaban pasando por un momento "propicio" para alcanzar acuerdos, e incluso anunció que la ONU abriría en San Salvador, "posiblemente en el mes de diciembre", una oficina para preparar la verificación del proceso de paz. Según De Soto, dicha oficina desempeñaría el papel de "observador" en materia de respeto a los derechos humanos, control de la Fuerza Armada, cese al fuego y elecciones, de lo cual presentaría un informe al consejo de seguridad de la ONU. Una semana antes, en Caracas, De Soto había declarado que el proceso de negociaciones se estaba "acercando al momento definitivo para la paz".

Por su parte, el 12 de noviembre, el Ministro de Justicia y portavoz de la comisión gubernamental de diálogo, Dr. Oscar Santamaría, informó, en Guatemala, que el gobierno y el FMLN habían mantenido "contactos secretos" desde la última reunión tenida en México, a finales de octubre, para "preparar una reunión pública" en México o Caracas. Al día siguiente, en Tokio —a donde llegó para asistir a la coronación del emperador Akihito— el Presidente Cristiano indicó que su gobierno había solicitado a Pérez de Cuéllar buscar "nuevos métodos" para relanzar el proceso, el cual estaba en una fase de "aletargamiento" por culpa del FMLN.

A su vez, el 26 de noviembre último, el

FMLN anunció en Costa Rica una propuesta para concertar el cese al fuego en enero de 1991, con la condición previa de un acuerdo sobre la Fuerza Armada antes de que concluya 1990. El miembro de la comisión político-diplomática del FMLN, Miguel Sáenz, informó que la propuesta ya estaba en manos de la Secretaría General de la ONU.

No obstante todas estas gestiones e iniciativas, el diálogo no avanza, mientras la guerra tiende a recrudecer.

Como siempre, el "escollo" principal sigue siendo la Fuerza Armada, según lo reconoció el propio De Soto en Venezuela, el 6 de noviembre (Cable de EFE, fechado en Caracas, el 06.11.90).

El 16 de noviembre recién pasado, el Ministro de Defensa, coronel René Emilio Ponce, prometió que la institución castrense realizaría "todo tipo de reformas y reestructuraciones" internas a fin de contribuir al logro de la paz, independientemente de que el FMLN lo demande o no. De hecho, sin embargo, tales "reestructuraciones" no han pasado de ser sino simples rotaciones de mandos o, en el mejor de los casos, cuando Estados Unidos ha ejercido mayor presión, envío de los oficiales más corruptos como agregados militares al exterior. La Fuerza Armada se cierra totalmente a cualquier propuesta de reestructuración que vaya más allá. El 8 de noviembre, el Viceministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, enfatizó que "si el FMLN se empecina en poner como obstáculo y como punto de honor la desaparición de la Fuerza Armada, no habrá ningún progreso en las negociaciones". "El tema de la existencia de la Fuerza Armada —añadió— no está en la mesa de discusión. Somos una institución que nació y vivió con la república, la principal muralla contra la guerrilla y la garante para que la democracia pueda caminar y

desarrollarse”.

El gobierno, luego del fracaso de la propuesta de cese de fuego unilateral que el Presidente Cristiani llevó a la ONU a comienzos de octubre, y del revés político que le propinó el Congreso norteamericano al recortar la ayuda militar, intenta ahora manipular nuevamente el proceso de diálogo en función de la carta de las elecciones, aprovechando la nueva coyuntura electoral que se ha abierto de cara a los comicios legislativos y municipales de marzo próximo. El 17 de noviembre, el Dr. Santamaría afirmó que hay buenas probabilidades de que se logren acuerdos próximamente, sobre todo en materia electoral, para “generar un ambiente que sea propicio para que las votaciones se desarrollen con normalidad”.

No obstante, el FMLN, aunque se manifiesta dispuesto a discutir la cuestión electoral, ha rechazado este nuevo intento de manipulación del proceso, el cual no persigue últimamente orientar el diálogo en función de una paz con justicia, sino en función de las elecciones, y éstas, a su vez, en función de la consolidación de ARENA. Sobre este punto, el 13 de noviembre, la comandancia general del FMLN difundió un comunicado en el cual afirmaba que “sin acuerdos en la negociación global, y especialmente en el punto de la Fuerza Armada, las elecciones no serán libres ni honestas”, y los partidos de oposición estarían en desventaja porque el país estaría “militarizado y en medio de una guerra aún más extendida”. El FMLN admite que, genéricamente, las elecciones son el mecanismo “idóneo” para un régimen democrático, pero las de marzo se realizarán en un “clima de represión” si no hay acuerdos sobre la Fuer-

za Armada; y las reformas al código electoral propuestas por la interpartidaria “no son suficientes para que se den unas elecciones democráticas”.

Una semana antes, en otro comunicado, difundido a través de radio Farabundo Martí, el FMLN señalaba que “el poder de los militares sigue imponiéndose sobre cualquier otro poder, incluido el del voto”, por lo cual, sin acuerdos sobre la desmilitarización del país, “el poder del voto no pasará de ser un ilusorio slogan publicitario”. A su vez, en un artículo distribuido el 1 de noviembre a los medios de comunicación, el comandante Joaquín Villalobos expresaba que las elecciones “no son una opción para la paz si no hay acuerdos fundamentales en las negociaciones sobre el asunto de la Fuerza Armada”, porque “los militares querrán usarlas para la guerra, y la oposición sufrirá persecución y atropellos”. Según Villalobos, “la única salida para recuperarles credibilidad sería que el FMLN les diera un mínimo de aval” pero “si se quiere legitimidad electoral hay que negociar en serio y rápido”.

A partir de la última reunión de diálogo, Alvaro De Soto ha desarrollado una intensa labor de intermediación para preparar un nuevo encuentro, que en un principio estaba programado para la primera semana de noviembre, que luego fue pospuesto para finales del mes y que ha sido nuevamente postergado para una fecha aún indefinida. Sin embargo, no puede descartarse que el derribamiento de un avión A-37, por medio de un misil SAM-7, el viernes 23 de noviembre, en Usulután, suceso que ha colocado al borde del paroxismo a la Fuerza Armada, pueda afectar las perspectivas del diálogo, que de por sí ya estaban sombrías.

La intensificación de la guerra y los derechos humanos

El 20 de noviembre recién pasado, el FMLN lanzó una campaña militar denominada "Castigo a la Fuerza Armada Anti-Democrática". Hasta ahora, esta maniobra nacional ha incluido ataques a la Fuerza Aérea (FAS), la Sexta Brigada de Infantería en Usulután, la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, el Destacamento Militar No. 4 en San Francisco Gotera, y contra posiciones militares menores en Zacatecoluca, Apopa, Nejapa, Quezaltepeque, y otros lugares.

Según su comunicado dado a conocer el mismo día 20, la Comandancia General del FMLN habría "decidido responder militarmente a la impunidad, la represión, los operativos militares de la Fuerza Armada y a la intransigencia del gobierno al negarse a la desmilitarización total de la sociedad aferrándose a la permanencia de un ejército criminal".

No es posible todavía presentar un informe completo o un balance de lo ocurrido en este último momento de la guerra. Informes parciales registran un elevado número de bajas en las filas de ambas partes, así como víctimas entre la población civil, aun cuando Monseñor Rosa Chávez, en su homilía del 25 de noviembre, "reconoció que las partes en conflicto hicieron lo posible para no causar daños a la población" (*Diario Latino*, 26 de noviembre).

Según un informe oficial, el FMLN, en menos de 24 horas, ocasionó 12 muertos y 76 heridos en las filas del ejército. El COPREFA aseguró también que en las acciones armadas murieron 10 guerrilleros y 3 civiles. Por su parte, un informe del FMLN reportó que sus fuerzas ocasionaron 150 bajas al ejército, así como daños y pérdidas

de equipo militar (*Diario Latino*, 21 de noviembre). La oficina de Tutela Legal del Arzobispado informó de la muerte de 18 civiles y 36 personas que no podían ser identificadas, incluyendo miembros de la guerrilla, en la semana del 16-23 de noviembre. Según la Iglesia, la Fuerza Armada reconoció 62 bajas (*Diario Latino*, 26 de noviembre).

El gobierno condenó los ataques y pidió apoyo a la ciudadanía: "Esta agresión criminal del FMLN contra la población civil ha encontrado a nuestra Fuerza Armada preparada para cumplir con su deber constitucional, lo que le ha permitido contrarrestar y repelar a los grupos terroristas del FMLN". (*Diario Latino*, 21 de noviembre). La Comisión de Derechos Humanos gubernamental denunció y condenó las acciones perpetradas por los comandos del FMLN contra la población civil (*Diario Latino*, 22 de noviembre).

Por su parte, el FMLN respondió que el planteamiento del gobierno "es mentiroso porque la Fuerza Armada antidemocrática se ha mantenido en ofensivas sobre nuestros frentes y porque los militares dijeron horas antes de iniciarse nuestra campaña, que el FMLN ya no tenía ninguna capacidad militar" (*Diario Latino*, 21 de noviembre).

Aun con las limitaciones en la información disponible, es importante señalar que el país todavía está en guerra y que todos los esfuerzos deben ser dirigidos hacia una solución duradera del conflicto bélico. Los últimos acontecimientos lo comprobaron una vez más en forma tajante. En su homilía del 25 de noviembre, Monseñor Rosa Chávez manifestó que "condenamos las acciones militares de donde vengan", y reiteró que "la Iglesia Católica no puede hacer más que

pronunciarse por una salida pacífica a la guerra y llamar a las partes a la concertación de acuerdos a fin de que no se continúe afectando a la población" (**Diario Latino**, 26 de noviembre).

El 20 de noviembre, el propio Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, se declaró "preocupado" por el ataque de objetivos militares en El Salvador por parte del FMLN, pero señaló también que en el proceso de diálogo "no había compromiso previo de las partes de cesar la acción militar" (**La Prensa Gráfica**, 21 de noviembre).

A la par del incremento de las acciones bélicas, se ha visto nuevamente una serie de cateos y amenazas contra el movimiento popular y sectores que le apoyan así como contra políticos de oposición. El 21 de noviembre, el obispo luterano Medardo Gómez advirtió que "tenemos miedo de que con el aumento de las acciones militares del FMLN, la reacción de la Fuerza Armada será dirigida contra las iglesias y las instituciones humanitarias." El 20 de noviembre, el gobierno dio a conocer números de teléfono a los cuales podría llamar cualquier ciudadano para informar sobre cualquier movimiento que despertara sospechas. El Ministro de Defensa, coronel René Emilio Ponce, pidió a la población colaborar con la Fuerza Armada y denunciar cualquier movimiento sospechoso (**Diario de Hoy**, 22 de noviembre).

En el último mes, después del fallido ataque al Estado Mayor con un "tepezcuintle" que causó la muerte de dos niños en la colonia San Francisco, los militares han realizado una serie de cateos "buscando tepezcuintles" en todos los rincones de la capital. En este período se ha visto un incremento notable en el número de cateos a oficinas de organismos humanitarios.

En las últimas semanas, soldados de la Primera Brigada de Infantería han realizado cateos en las oficinas de COACES, CREDHO y ASPS. La oficina y bodega de la Congregación de Madres en Perquín (Mo-

razán), fueron allanadas por soldados del batallón Arce el 15 de noviembre. Según los pobladores, los soldados se llevaron leche, azúcar y harina así como documentos y archivos, aunque posteriormente las mujeres lograron convencerlos de devolver algunas de las cosas decomisadas. El 23 de noviembre, efectivos de la Policía Nacional catearon la oficina de CODYDES, sin orden judicial. El 28 de noviembre, por segunda vez en tres meses, las oficinas de la Fundación CORDES fueron cateadas por "individuos no identificados."

El comandante del Destacamento Militar No. 4, teniente coronel Oscar León Linares, ha manifestado que un vehículo lleno de personas llegó a la oficina de PADECOES, en San Francisco Gotera, la noche previa al ataque guerrillero, y que uno de los guerrilleros muertos era un repatriado de la Ciudad Segundo Montes. PADECOES y la Comunidad Segundo Montes niegan estas acusaciones. Un directivo de PADECOES indicó que "el ejército está buscando excusas para justificar más represión en contra del pueblo."

En este marco de tensión creciente, en que el gobierno ha persistido en su vieja costumbre de echar la culpa de las acciones del FMLN a sectores sociales más vulnerables, el FMLN envió una carta al Secretario General de la ONU, informándole de un presunto plan del gobierno y la Fuerza Armada para eliminar religiosos, líderes sindicales, dirigentes de partidos políticos y organizaciones populares (**Diario Latino**, 28 de noviembre). "Para la insurgencia, las mismas declaraciones dadas recientemente por el Presidente Alfredo Cristiani, al decir éste que los más recientes acontecimientos militares en el país provocarán 'acciones de violencia de los sectores duros', pretenden justificar acciones de violencia contra la oposición."

Dados los acontecimientos del año pasado, hay que tomar muy en serio la denuncia del FMLN. Basta recordar la ma-

sacre de los sindicalistas de FENASTRAS; los atentados contra dirigentes políticos de oposición; el asesinato de Héctor Oqueli Colindres; la masacre de los jesuitas; la denuncia formulada por Monseñor Rivera Damas sobre un plan Djakarta para eliminar a opositores, incluidos él mismo y su obispo auxiliar; y, sobre todo, el hecho de que los responsables de éstos y otros crímenes han quedado impunes, y a la gran mayoría ni siquiera se les ha investigado. Tampoco parece que se ha hecho mayor cosa para evitar posibles repeticiones. Por un tiempo, la presión internacional puede servir de freno; sin embargo, un incremento de la acción militar del FMLN —como se vio el año pasado— fácilmente puede quitar ese freno.

¿Cuál es el significado de todos estos acontecimientos? Por un lado, no es cierta la afirmación del gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos gubernamental de que "los ataques del FMLN son contra la población civil." Atacar a la población civil es una cosa. Atacar un objetivo militar es otra cosa. Estas afirmaciones constituyen un claro uso propagandístico de la terminología del derecho internacional humanitario. Pero no tienen validez jurídica. La comunidad internacional reconoce que en El Salvador hay guerra y, en consecuencia, apoya el proceso de diálogo-negociación a los más altos niveles.

Eso implica que es a la guerra a la que hay que poner fin. Con acuerdos. Y con buena fe. Es la guerra en su conjunto la que trae consecuencias negativas para la población civil. Ambas partes son las responsables, de una u otra forma, de distintas infracciones al derecho internacional humanitario, aunque no en la misma medida.

Entonces, por una parte, el gobierno y el FMLN deben tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo sobre Derechos Humanos firmado en San José el pasado 26 de julio, en el sentido de humanizar el conflicto. Hasta cierto punto, el Acuerdo parece haber influido en limitar las

conductas de las partes en ocasión de esta campaña del FMLN, especialmente en comparación con lo que ocurrió durante la ofensiva de noviembre del año pasado. Sin embargo, como indicó Monseñor Rosa Chávez, "ambas partes deben buscar los acuerdos políticos más adecuados a fin de que no se continúe envenenando la atmósfera y que la esperanza de paz no se pierda a raíz del incremento del accionar militar lanzado por la guerrilla." La necesidad de cumplir a cabalidad con los compromisos ya aceptados, de implementar la misión de verificación de las Naciones Unidas para reforzarlos, y de negociar los acuerdos necesarios para lograr el cese de fuego, no puede ser más obvia.

Por otro lado, como hemos estado comentando, la responsabilidad del Estado no consiste solamente en respetar los derechos humanos, sino también en garantizarlos. En el comentario sobre "El caso de la UCA y los deberes del Estado" (**Proceso 452**), enfocamos la obligación del Estado de prevenir violaciones. Nos preocupa ver que la historia parece repetirse ahora. En vez de señalar que "sectores duros" van a reaccionar en forma violenta si el FMLN realiza acciones militares, le compete al Presidente de la República y al gobierno tomar las medidas para que estos "sectores duros" ya no puedan repetir sus violaciones y actuar con impunidad. El discurso debe ser claro en rechazar tales conductas. Desafortunadamente, hasta ahora no hay señales de que la política gubernamental haya cambiado en este sentido. Siguen la desinformación y las amenazas, mientras faltan todavía las acciones gubernamentales para tomar las medidas necesarias para poner fin a la impunidad. Se espera que el gobierno y la Fuerza Armada se den cuenta pronto de que ya no pueden seguir así; que tienen que asumir sus deberes de respeto y garantía de los derechos humanos conforme a sus compromisos internacionales y así hacer posible la paz duradera.

El caso jesuitas y las perspectivas para la paz en El Salvador (I)

Transcribimos los comentarios que sobre el tema a que se refiere el título de esta sección, hiciera el representante Joe Moakley en la Universidad de Georgetown, el 13 de noviembre recién pasado.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas, su cocinera y la hija de ésta, fueron salvajemente asesinados en la Universidad Centroamericana en San Salvador, El Salvador. Poco después de que este horrible crimen fuese cometido, el Presidente de la Cámara de Representantes, Tom Foley, nombró un Comité Especial de 19 miembros para revisar la investigación salvadoreña de esta tragedia y para observar temas relacionados que comprendieran el respeto a los derechos humanos y la reforma judicial en El Salvador. El Presidente de la Cámara de Representantes me pidió que fungiera como jefe de este Comité Especial.

Ser miembro de este Comité representa mi primera incursión en el mundo de la política exterior. Yo no soy un experto en política exterior. Soy básicamente un político sin grandes pretensiones, dispuesto más que nada a mejorar la vida cotidiana de la gente del sur de Boston. Siempre me he sentido más cómodo presentándome en ceremonias de inicio de nuevos proyectos federales que en reuniones más académicas como ésta —aunque me honra estar en esta distinguida universidad hoy—.

Sin embargo, desde mi nombramiento como titular del Comité Especial sobre El Salvador del Presidente de la Cámara de Representantes, he aprendido mucho sobre ese país. Durante casi un año, he seguido este tema de cerca, hablando con funcionarios salvadoreños, tanto civiles como militares, entrevistando a funcionarios esta-

dounidenses, viajando a El Salvador, leyendo detenidamente cantidades de material cablegráfico y hasta reuniéndome secretamente en lugares remotos bajo las más extraordinarias circunstancias con salvadoreños que tienen información relevante sobre este caso. Algunas veces me he sentido como Humphrey Bogart en "Casablanca". En realidad, desde que me he dejado crecer una nueva barba, prefiero compararme con Sean Connery en "Indiana Jones y la Última Cruzada".

Y esta tarde, con su permiso, me gustaría discutir brevemente dos temas: el caso jesuitas y las perspectivas para la paz en El Salvador.

Desde el principio, una pregunta principal para nuestro Comité ha sido si los problemas de derechos humanos en El Salvador —incluyendo los asesinatos de los jesuitas— resultan de las acciones de unos pocos militares renegados y figuras políticas que operan al margen de la sociedad salvadoreña o si, de hecho, se derivan de actitudes y acciones que van al propio seno de la Fuerza Armada y otras instituciones importantes en ese país.

Mientras estuve en El Salvador en febrero pasado y durante muchas reuniones con miembros del gobierno salvadoreño y miembros de la embajada de los Estados Unidos, me dijeron que yo debería ver el caso de los jesuitas como fruto de las trastornadas acciones de unos pocos y no como una acusación contra la Fuerza Armada como institución.

Recuerdo que me dijeron que "las instituciones no matan gente, sino que gente mata a gente". Pero, cualquiera que esté familiarizado con los hechos en el caso jesuitas debe concluir que los asesinatos reflejan problemas dentro de la Fuerza Armada salvadoreña que van mucho más allá que las acciones de una unidad particular en una noche particular. Reflejan problemas que están profundamente arraigados en la Fuerza Armada como institución.

Es mi firme convicción que el asesinato de los jesuitas resultó de una actitud de sospecha e ira hacia segmentos activistas de la Iglesia. Esta actitud se encuentra todavía demasiado generalizada dentro de la Fuerza Armada salvadoreña y otros sectores de la sociedad salvadoreña. Debido a esta actitud, se hace muy poco esfuerzo por distinguir entre aquéllos que usan métodos pacíficos (no violentos) para abogar o lograr cambios, y los guerrilleros que toman las armas contra el gobierno.

Uno de los recuerdos más inquietantes que tengo de mi viaje a El Salvador es la evidente sorpresa de muchos militares porque nosotros, los miembros del Comité Especial, estábamos haciendo un gran escándalo del caso de los jesuitas. Oímos una y otra vez a militares de alto rango describir este crimen como "estúpido", "contraproducente". Pero ningún militar de alto rango con quien hablamos dijo que era "injusto". Aun ahora, algunas veces tengo la impresión de que el poco progreso que se hace en el caso se debe más a un deseo de callar a Estados Unidos y no porque ésa sea la acción correcta en sí misma.

Déjeme ser claro. Existen algunas personas buenas y decentes en la Fuerza Armada salvadoreña. De ninguna manera estoy sugiriendo que todos los miembros de la Fuerza Armada son indiferentes a los derechos humanos, o que no quieren que la justicia prevalezca. Durante el último año, me he reunido con algunos militares salva-

doreños que son hombres honorables y profesionales, y que quedaron horrorizados por el asesinato de los jesuitas. Pero, tristemente, estos hombres parecen tener poca influencia y poco impacto. Porque si lo tuvieran, yo creo que el caso jesuitas estaría, para esta fecha, resuelto. El bien no ha sido capaz de triunfar sobre el mal.

Y también creo que si el Presidente Alfredo Cristiani —quien creo es motivo de orgullo no sólo para El Salvador sino también para la Universidad de Georgetown— tuviera el poder necesario para controlar y ordenar a la Fuerza Armada salvadoreña, el caso jesuitas, para esta fecha, estaría resuelto. En ningún momento he dudado del deseo del Presidente Cristiani de resolver este caso y llevar a los responsables ante la justicia.

Sin embargo, la alta jerarquía de la Fuerza Armada salvadoreña ha fracasado en proveer la cooperación necesaria para que este caso avance. Dije en agosto —y lo digo de nuevo hoy— que creo que el Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña está comprometido en una conspiración para obstruir la justicia en el caso de los jesuitas. Militares salvadoreños han retenido evidencia, han destruido evidencia, han falsificado evidencia y repetidamente han cometido perjurio en su testimonio ante el juez. No creo que esto pudiera hacerse sin por lo menos el consentimiento tácito del Alto Mando.

Ni un solo miembro de la Fuerza Armada se ha presentado abierta y voluntariamente aportando información sobre el caso. Esto es cierto a pesar del hecho de que, literalmente, cientos de militares estaban desplazados en el área alrededor de la Universidad Centroamericana la noche de los asesinatos.

Varios miembros de la Fuerza Armada han adoptado un enfoque al estilo Watergate para testificar en el caso, diciendo esencialmente que no recuerdan haber oído, visto o sabido nada de lo que ocurrió

la noche de los crímenes.

Libros de registro que mostraban, entre otras cosas, las entradas y salidas de vehículos de la Escuela Militar —donde comenzó la operación para asesinar a los jesuitas— fueron aparentemente quemados por órdenes de un militar de alto rango.

El coronel salvadoreño Carlos Avilés, quien, según se informa, le dijo a un funcionario americano en diciembre pasado que un militar colega suyo, el coronel Benavides, había admitido su culpa en el caso, ha testificado recientemente que él apenas conocía al americano. De hecho, él (Avilés) trabajó hombro a hombro con el americano durante meses y pidió específicamente su asignación a El Salvador.

Y cuando el juez a cargo del caso pidió la presencia de cuatro cadetes de turno en la Escuela Militar la noche de los hechos, cuatro cadetes que no eran los pedidos fueron presentados. Cuando los verdaderos cadetes fueron presentados, ellos afirmaron no haber visto nada.

Dado el código de lealtad que existe dentro de la Fuerza Armada salvadoreña, es para mí inconcebible que oficiales mintieran intencionalmente y destruyeran evidencia a no ser que ellos creyeran que esas acciones serían aprobadas, o —de hecho— ordenadas, por sus superiores.

Estoy convencido de que, si el deseo político existiera dentro del Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña, podríamos resolver este caso de inmediato. Sé que hay personas dentro de la Fuerza Armada que saben la verdad. Pero, desgraciadamente, estos oficiales tienen miedo de presentarse. Y la fuente de ese miedo sólo puede venir de la misma Fuerza Armada.

Esta obstrucción de la justicia, junto con la acción del Congreso de los Estados Uni-

dos de reducir la ayuda militar, ha creado una gran tensión dentro de la Fuerza Armada. Oficiales jóvenes que no están involucrados en los crímenes están enfadados ante la perspectiva de perder apoyo moral y financiero del gobierno de Estados Unidos debido a las acciones del Alto Mando. La Fuerza Armada parece estar más dividida, y crece la presión para terminar con la conspiración de silencio y mentiras que ha caracterizado —desde el primer día— la actitud de los militares hacia este caso.

Como ustedes probablemente saben, ocho militares, incluyendo un coronel (el Coronel Benavides), han sido arrestados por los asesinatos. Ahora es esencial que el juez continúe construyendo el caso de la manera más sólida posible contra aquéllos arrestados, incluyendo al coronel. Es esencial que el juez continúe investigando el posible involucramiento de otros militares de alto rango en ordenar los asesinatos, o en intentar obstruir la investigación. Es vital que el Alto Mando militar aliente a cualquier oficial con conocimiento en el caso a presentarse y rendir su declaración. Es esencial que el gobierno de Cristiani y la Corte Suprema salvadoreña no presionen al juez para que eleve el caso a plenario hasta que el juez esté satisfecho de que una investigación concienzuda de todos los hechos ha sido realizada. Y es importante que el gobierno de Estados Unidos ponga a disposición del juez toda la información que —de cualquier fuente— pueda tener.

La investigación del caso jesuitas ha sometido a una prueba de máxima exigencia a las pretensiones salvadoreñas en su búsqueda de la democracia, la justicia y a cualquier pedido de ayuda estadounidense. Es una prueba que el gobierno salvadoreño todavía no ha superado.

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢50.00
correo	¢60.00
Centroamérica y Panamá	\$25.00
Norte y Sur América	\$35.00
Europa	\$40.00
Otras regiones	\$45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 161 y 191.